

RADICAL RADIO Y OTROS VS. CHIRILAGUA

ESTADO DE CHIRILAGUA

2. INDICE

1. PORTADA

2. INDICE	II
3. BIBLIOGRAFIA	III
3.1. Libros y documentos legales	III
3.1.1. Libros	III
3.1.2. Documentos legales	V
3.2. Casos legales.....	VI
3.2.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	VI
3.2.2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	XIII
3.2.3. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	XIV
3.2.4. Corte Internacional de Justicia.....	XIV
4. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS.....	1
5. ANALISIS LEGAL	3
5.1. Análisis de los aspectos preliminares de admisibilidad.....	3
5.1.1. Error grave en la actuación de la Comisión.....	3
5.1.2. Inaplicabilidad de la Convención Americana a las personas jurídicas.....	6
5.2. Análisis de los asuntos legales del caso.....	11
5.2.1. Chirilagua no violó el artículo 25 en relación con el 1.1 de la Convención.....	11
5.2.2. Chirilagua no violó el artículo 8 en relación con el 1.1 de la Convención.....	17
5.2.3. Chirilagua no violó el artículo 13 en relación con el 1.1 de la Convención.....	21
6. PETITORIO.....	30

3. BIBLIOGRAFIA

3.1. Libros y documentos legales

3.1.1. Libros

- ALBALADEJO, Isabel, y ESCOBAR, Santiago. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica. 2005. (Págs. 8 y 24)
- ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES. La libertad de Expresión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Pág. 24)
- BORJÓN NIETO, José J. Jurisdicción universal y jurisdicción interna: ¿Cómo salvar escollos? (Pág. 25)
- BURGOS, Germán. Independencia judicial en América Latina. ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Edición ILSA. Colombia 2003. (Pág. 15)
- COLMENARES OLIVAR, Ricardo. La libertad de información y las investigaciones penales en Venezuela. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Venezuela. 2000. (Pág. 30)
- CORAO AYALA, Carlos. La sentencia 1.942 vs La protección internacional de los Derechos Humanos. Revista Interamericana de Derecho Procesal Constitucional. Vol. 1. IIDPC. México. 2004. (Pág. 27)

- COURTIS, Cristian. El derecho a un recurso rápido sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos. Revista Interamericana de Derecho Procesal Constitucional. Vol. 5. IIDPC. México. 2006. (Pág. 12)
- DULITZKY. Ariel, 50 años del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Una propuestas de reflexión sobre cambios estratégicos necesarios. Revista IIDH. Vol. 46. (Pág. 3)
- FAÚNDEZ, Héctor. El agotamiento de los recursos internos en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Caracas, Venezuela. 2008. (Págs. 15 y 25)
- FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica. 2004. (Págs. 6 y 8)
- FRÜHLING, Michael. Los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el secuestro y los acuerdos especiales. Alto comisionado para los Derechos Humanos. Colombia. 2003. (Pág. 20)
- HURTA GUERRERO, Luis Alberto. El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Comisión Andina de Juristas. Perú. 2001. (Págs. 18 y 21)

- INTERNATIONAL CENTER FOR JOURNALIST. Medios y Libertad de Expresión en las Américas. Washington, DC. 2003. (Págs. 25 y 26)
- MEDINA, Cecilia y NASH, Claudio. Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus Mecanismos de Protección. Centro de Derechos Humanos. Universidad de Chile. 2007. (Pág. 10)
- MELENDEZ MOREIRA, Miguel. El futuro del sistema interamericano de derechos humanos. Colegio interamericano de Defensa. Washington, D.C. 1997. (Pág. 9)
- O'DONELL, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, Jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Colombia. 2004. (Pág. 18)
- ONU. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Derecho a la libertad de expresión y Libertad de Acceso a la información. Boletín 15. (Pág. 22)
- RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Estudio Especial Sobre el Derecho de Acceso a la Información. CIDH. Washington, D.C. 2007. (Pág. 29)
- VALDIVIA CANO, Juan Carlos. Algunos conceptos básicos del derecho internacional. Universidad Nacional de San Agustín. (Pág. 10)

3.1.2. Documentos Legales

- Convención Americana de Derechos Humanos. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. (Págs. 12, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 28 y 29)
- Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adoptado el 24 de noviembre de 2000. (Pág. 6)
- Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adoptado del 16 al 28 de noviembre de 2009. (Pág. 6)
- Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados Entre Estados y Organizaciones Internacionales o Entre Organizaciones Internacionales. (Págs. 10 y 23)
- Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales Y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. (Pág. 12)
- Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH. (Pág. 27)
- Informe de la Relatoría Sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2009. (Págs. 23 y 29)
- Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Chirilagua o Ley 56 de 1976. (Pág. 20)

3.2. Casos legales

3.2.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos

- CORIDH. Caso Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. (Págs. 4, 5, 6, 11 y 16)
- CORIDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207. (Págs. 18 y 26)
- CORIDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206. (Pág. 21)
- CORIDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203. (Pág. 4)
- CORIDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200. (Pág. 4)
- CORIDH. Caso Acevedo Buendía y otros “Cesantes y Jubilados de la Contraloría” Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198. (Págs. 11 y 14)
- CORIDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197. (Pág. 11)
- CORIDH. Caso Cepeda Vargas vs. Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de abril de 2009. (Pág. 6)
- CORIDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196. (Pág. 12)

- CORIDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. (Pág. 6)
- CORIDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. (Págs. 26 y 28)
- CORIDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190. (Págs. 4 y 5)
- CORIDH. Caso García Prieto y Otros Vs El Salvador. Fondo. Sentencia de 24 de Noviembre de 2008. (Pág. 16)
- CORIDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. (Pág. 6)
- CORIDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 183. (Págs. 4, 11, 12 y 13)
- CORIDH. Caso Apitz Barbera y otros “Corte Primera de lo Contencioso Administrativo” Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. (Pág. 14)
- CORIDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180. (Pág. 6)
- CORIDH. Caso Kimel vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. (Págs. 4, 5, 21, 25, 26, 27 y 28)
- CORIDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172. (Pág. 4)

- CORIDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. (Págs. 13, 16, 18, 21, 23, 27 y 29)
- CORIDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154. (Pág. 16)
- CORIDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153. (Pág. 4)
- CORIDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de julio de 2006 Serie C No. 148. (Págs. 4, 5, 6 y 16)
- CORIDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144. (Págs. 11 y 13)
- CORIDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141. (Pág. 21)
- CORIDH. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A No. 19. (Págs. 3 y 4)
- CORIDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. (Págs. 18, 26, 27 y 28)

- CORIDH. Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. (Págs. 17 y 18)
- CORIDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia 7 de marzo 2005. Serie C No. 122. (Pág. 6)
- CORIDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119. (Pág. 21)
- CORIDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. (Págs. 21, 22, 25, 26 y 27)
- CORIDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109. párr. 192. (Pág. 13)
- CORIDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. (Págs. 21, 25, 26, 27 y 28)
- CORIDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104. (Págs. 11 y 13)
- CORIDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103. (Pág. 13)
- CORIDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99. (Págs. 13, 14 y 15)
- CORIDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98. (Págs. 14 y 15)

- CORIDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97. (Pág. 14)
- CORIDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02. 28 de agosto de 2002. (Pág. 11)
- CORIDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90. (Págs. 14, 15 y 25)
- CORIDH. Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia del 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85. (Pág. 8)
- CORIDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79. (Págs. 12, 13 y 16)
- CORIDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. (Págs. 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26 y 27)
- CORIDH. Caso “La Última Tentación de Cristo”(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. (Págs. 22, 25 y 27)
- CORIDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. (Págs. 17, 18 y 23)
- CORIDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. (Págs. 14, 16, 17 y 19)
- CORIDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. (Págs. 11 y 12)

- CORIDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69. (Págs. 12 y 13)
- CORIDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68 (Págs. 11, 12 y 19)
- CORIDH. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56 (Págs. 11 y 12)
- CORIDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. (Págs. 12, 13, 15 y 21)
- CORIDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40. (Pág. 11)
- CORIDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37. (Págs. 13 y 15)
- CORIDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35 (Págs. 13 y 19)
- CORIDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34. (Pág. 13)
- CORIDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33. (Pág. 16)
- CORIDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27. (Pág. 13)

- CORIDH. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11. (Págs. 18 y 19)
- CORIDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89. 14 de julio de 1989. Serie A No. 10. (Págs. 9 y 25)
- CORIDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3. (Págs. 11, 12 y 25)
- CORIDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2. (Págs. 10, 11, 12 y 25)
- CORIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1. (Págs. 10, 11 y 12)
- CORIDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87. 06 de octubre de 1987. (Págs. 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19)
- CORIDH. Habeas Corpus Bajo suspensión de garantías. Opinión Consultiva OC-87/87. 30 de enero de 1987. (Pág. 11)
- CORIDH. Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7. (Pág. 25)

3.2.2. Casos legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

- CIDH. Informe N° 122/01. Petición 0015/00. Wilma Rosa Posadas, Argentina. 10 de octubre de 2001. (Pág. 16)
- CIDH. Informe No. 10/91, Caso No. 10.169. Petición Banco Lima., Perú. 22 de febrero de 1991, en el Informe Anual de 1990-1991, pág. 454 y ss. (Pág. 8)
- CIDH. Informe No. 47/97, Tabacalera Boquerón S.A., Paraguay. 18 de octubre de 1997, en el Informe Anual de 1997, pp. 229 y ss., párrafos 25 y 35. (Pág. 8)
- CIDH. Informe 87/98. Caso 11.216. Oscar Vila-Mazot, Venezuela. 12 de octubre de 1998. (Pág. 25)
- CIDH. Informe 85/98. Caso 11.472. Gilbert Bernard Little, Costa Rica. 28 de septiembre de 1998. (Pág. 25)
- CIDH. Informe N° 35/98. Caso 1L760. Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo de Mur, Perú. 5 de mayo de 1998. (Pág. 16)
- CIDH. Informe No. 39/99, Petición MEVOPAL, S.A., Argentina. 11 de marzo de 1999, en el Informe Anual de 1998, pág. 308 y ss. (Págs. 7 y 8)
- CIDH. Resolución N° 6/84 Caso No. 9250 ABC Color., Paraguay. 17 de mayo de 1984. (Pág. 8)

3.2.3. Casos legales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

- ECHR. Case Pine Valley Developments Ltd and Others Vs. Ireland, Judgment of 29 November 1991. (Pág. 22)

- ECHR. Case De Wilde, Ooms and Versyp. Vs. Belgium. Judgment 18 de junio de 1971. (Pág. 23)
- ECHR. Case of Popov Vs. Moldova. Judgment of 18 January 2005. (Pág. 25)
- ECHR. Keenan v. the United Kingdom, Judgment of 3 April 2001. (Pág. 28)

3.2.4. Casos legales ante la Corte Internacional de Justicia

- I.C.J. Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom). Preliminary Objections. Judgment of 2 December 1963, Reports 1963. (Pág. 37)
- I.C.J. Case of the Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Judgment of 7 June 1932, Series A/B No. 46. (Pág. 37)

4. Exposición de los hechos

La República Federativa de Chirilagua es un Estado fiscalmente catalogado como de renta media alta. Chirilagua ha contado con una democracia estable en la que tradicionalmente el partido Chirilaguense Popular (PCP) y el partido de la Renovación Democrática de Chirilagua (RDC) se han alternado el poder. En 2006 Atilio Escalante Norris accedió a la presidencia de la República. En los últimos años los seguidores del presidente han promovido una reforma constitucional para permitir un segundo mandato de Escalante. Para ello el PCP propuso que en las elecciones generales para diputados se permitiera el escrutinio de una consulta popular llamada “La Papeleta de la Democracia”, sin embargo el resultado no sería vinculante. Dos meses antes de las elecciones, un grupo de estudiantes convocó a una marcha nacional e internacional en contra de la “Papeleta” a través de un grupo conformado en la red Facebook, dicha convocatoria se expandió por otras redes sociales y varias cadenas de Radio entre las que se encontraban “Radical Radio” y “Radio Su-Versión”.

El 3 de marzo de 2008 la marcha conocida como el “facebookazo” se llevo a cabo en diversas ciudades del país. En varias marchas se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y seguidores del partido oficialistas. La situación más dramática se vivió en la población de San Pedro de los Aguados donde 6 personas murieron y 15 más resultaron heridas. El 10 de marzo se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias donde se permitió “La Papeleta de la Democracia”. De nuevo se registraron actos violentos en San Pedro de los Aguados donde 3 personas murieron. Radical Radio fue el primer medio masivo que divulgo el “facebookazo”; dedicó varios programas de opinión para promover la participación y comentar la iniciativa. Radio Su-Versión realizo un convenio de cooperación con Radical Radio para retransmitir algunos de sus programas y en eventos especiales realizaron transmisiones encadenadas.

El 5 de marzo de 2008 la Comisión Federal de Regulación de Telecomunicaciones (COFERETEL) inició una revisión de las concesiones de radio y televisión donde solicitó datos y requisitos de todas las concesiones dadas por el Estado, el 6 de marzo se dispuso el cierre de varias concesiones que no cumplían los requisitos establecidos, entre ellas Radical Radio y Radio Su-versión, frente a esto Byron Dayle en calidad de representante legal de Radical Radio y Melanie Pereira Peroni titular de la concesión interpusieron una acción de constitucionalidad. De la misma manera que lo hizo Francis Hoffman como Representante legal de Radio Su-Versión. Así mismo se imputaron a más de 30 personas por la presunta comisión del delito de hurto de bienes del Estado. El 14 de julio de 2008 se acusó a Melanie Pereira Peroni, Byron Dayle y Francis Hoffman por este delito. El 20 de julio de 2008 se les acusó por los delitos de instigación a delinquir y difamación en perjuicio del Presidente. El 25 de julio se acusó a William Garra locutor periodista e imitador de Radical Radio, por los delitos de instigación a delinquir, difamación y homicidio. El 2 de diciembre de 2008 la Federación Interamericana de Medios por la Democracia presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) por la presunta violación de Derechos en perjuicio de Radical Radio y Radio Su-Versión, así como de Melanie Pereira Peroni, Francis Hoffman, William Garra y de la población de Chirilagua en general. La CIDH decidió adoptar un informe en el cual declaró admisible el caso y encontró violaciones a los artículos 8, 13 y 25 de la Convención Americana, todos en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de Melanie Pereira Peroni, Francis Hoffman, William Garra y Byron Dayle. Cumplidos los plazos y trámites correspondientes la Comisión decidió someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”). Por su parte las víctimas allegaron a la Corte su memorial de argumentos, solicitudes y pruebas en el que reiteraron que en el caso debían tenerse como presuntas víctimas a las emisoras Radical Radio y Radio Su- Versión.

5. Análisis legal del caso

5.1. Análisis de los aspectos preliminares de admisibilidad

El Estado de Chirilagua analizó la competencia de la Corte para el caso de Radical Radio y otros; la República Federativa de Chirilagua, ratificó la Convención y reconoció la competencia contenciosa de la Corte en 1980; encontrando competente a la Corte en razón a la persona, la materia, al tiempo y al lugar, para conocer del caso en particular.

5.1.1. Error grave en la actuación de la Comisión

Al interponerse una excepción preliminar que cuestiona la actuación de la Comisión en relación con el procedimiento realizado ante este órgano, el Estado de Chirilagua está de acuerdo con la Corte, cuando reconoce “autonomía e independencia en el ejercicio del mandato de la Comisión conforme a lo establecido en la Convención”¹, específicamente en el “ejercicio de las funciones que le competen respecto al procedimiento de las peticiones individuales, regulado en los artículos 44 a 51 de la Convención.”² Reconociendo que “la principal fuente de efectividad, legitimidad y credibilidad del sistema interamericano, es la independencia y autonomía de la Comisión, la Corte y sus respectivas secretarías”³. El Estado manifiesta en el mismo sentido de la Corte que esta debe “efectuar el control de legalidad de las actuaciones de la Comisión en lo que se refiere al trámite de asuntos que estén bajo el conocimiento de la Corte”⁴; no es necesario que

¹ CORIDH. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A No. 19, Punto Resolutivo primero.

² CORIDH. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A No. 19, Punto Resolutivo segundo.

³ DULITZKY. Ariel, 50 años del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Una propuestas de reflexión sobre cambios estratégicos necesarios. Revista IIDH. Vol. 46. Pág. 34.

⁴ CORIDH. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A No. 19, Punto Resolutivo tercero.

se revise estrictamente todo el procedimiento ante la Comisión, salvo en caso en “que exista un error grave que vulnere el derecho de defensa de las partes”⁵.

Por otro lado, la Corte ha determinado en diferentes jurisprudencias y de conformidad con el artículo 34.1 del Reglamento, que corresponde a la Comisión “identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante esta Corte”⁶. Además, ha establecido que “las presuntas víctimas mencionadas en la demanda deben corresponder con las del informe de la Comisión del artículo 50 de la Convención, en virtud del principio de seguridad jurídica”⁷, es decir, que si se llegase a mencionar en la demanda como presuntas víctimas a personas no mencionadas en el informe preliminar, esta Corte no podrá considerarlas como presuntas víctimas y “consecuencialmente no le corresponderá pronunciarse acerca de las supuestas violaciones alegadas en su perjuicio”⁸. Corresponde a Chirilagua demostrar que la Comisión ha cometido un error en su actuación vulnerando el derecho de defensa del Estado, afectando la seguridad jurídica del sistema interamericano de derechos humanos, al presentar una nueva presunta víctima, en su informe sometimiento del caso ante la Corte.

⁵ CORIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso “Aguado Alfaro y otros” Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158. párr. 66; Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2008. Serie C No. 172. párr. 32 y 40; Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200. párr. 22; Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184 párr. 40; y Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203. párr. 35.

⁶ CORIDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 98; Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 117, párr. 102; y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190. párr. 58.

⁷ CORIDH, Caso Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. párr. 20; y Control de legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005. párr. 27.

⁸ CORIDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de julio de 2006. Serie C No. 148. párr. 98; Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 29; Caso Kimel vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. párr. 103; y Caso Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. párr. 20.

El 2 de diciembre de 2008 la Federación Interamericana de Medios por la Democracia presentó una petición ante la Comisión, alegando la violación de varios derechos consagrados en la Convención, en perjuicio de los siguientes, Radical Radio, Radio Su-Versión, Melanie Pereira Peroni, Francis Hoffman y William Garra. El 15 de diciembre de 2008 la Comisión dió trámite a la petición y trasladó al Estado, el cual dió respuesta a la misma, el día 15 de enero de 2009. En el informe adoptado conforme al artículo 37.3 y por el cual se sometió el presente caso ante la Corte, la Comisión declaró admisible el caso y estableció como presuntas víctimas a Melanie Pereira, *Byron Dayle*, Francis Hoffman y William Garra.

Al respecto, el Estado alega la violación de su derecho de defensa, cuando el señor Bayron Dayle no fue presentado como presunta víctima en el primer informe trasladado al Estado, lo cual conllevó a que Chirilagua no tuviese la oportunidad de pronunciarse sobre las presuntas violaciones causadas al señor Bayron Dayle. Así mismo, el error de la Comisión lleva al Estado a una inseguridad jurídica cuando las presuntas víctimas nombradas en el sometimiento del caso ante la Corte, no corresponden con las presentadas en el informe preliminar.

“La seguridad jurídica exige, que todas las presuntas víctimas estén debidamente identificadas tanto en el informe del artículo 50 de la Convención, como en el informe por el cual se presenta el caso ante la Corte, no siendo posible añadir nuevas presuntas víctimas en la demanda”⁹. El Estado manifiesta que si bien en casos como Masacre de Ituango vs. Colombia, la Corte insertó

⁹ CORIDH. Caso Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. párr. 20; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de julio de 2006. Serie C No. 148. párr. 98; Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de mayo de 2008. Serie C No. 117, párr. 102; y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 58.

nuevas presuntas víctimas, no establecidas en el informe preliminar¹⁰, ello se dió porque se trataba de violaciones colectivas, no individuales como en el presente caso.

Por las razones expuestas, el Estado de Chirilagua solicita ante esta Honorable Corte no se tenga en cuenta como presunta víctima al señor Bayron Dayle y consecuencialmente no se pronuncie acerca de las supuestas violaciones alegadas en su perjuicio.

5.1.2. Inaplicabilidad de la Convención Americana a las personas jurídicas

El momento para que “las presuntas víctimas o sus representantes ejerzan plenamente aquel derecho de *locus standi in judicio* es el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas”¹¹, esto se ejerce de acuerdo al artículo 23 del anterior reglamento de la Corte¹², aplicable al caso presente en cuanto este fue sometido a consideración de la Corte, antes del 1 de enero de 2010.¹³ En este sentido, “en la medida en que la objeción opuesta por el Estado demandado puede referirse a la falta de capacidad del actor para intentar la demanda, el *locus standi* del demandante desempeña un papel particularmente digno de mencionar y de examinar entre las excepciones preliminares de incompetencia”.¹⁴ “Dicha posibilidad tiene la finalidad de hacer efectiva la facultad procesal de *locus standi in judicio*, sin menoscabar o vulnerar el derecho de defensa del Estado”¹⁵ así

¹⁰ CORIDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de julio de 2006 Serie C No. 148. párr. 92.

¹¹ CORIDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180. párr. 18; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. párr. 33; Caso Cepeda Vargas vs. Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de abril de 2009. párr. 5; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia 7 de marzo 2005. Serie C No. 122. párr. 58; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. párr. 228.

¹² Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adoptado el 24 de noviembre de 2000.

¹³ Reglamento de la CORIDH. Adoptado del 16 al 28 de noviembre de 2009. Artículo 71 Aplicación.

¹⁴ FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica. 2004. Pág. 643.

¹⁵ CORIDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia 7 de marzo 2005. Serie C No. 122. párr. 58; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. párr. 228; y Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de julio de 2006 Serie C No. 148. párr. 89.

mismo, el Reglamento de la Corte aplicable para el caso establece que el Estado demandado “deberá presentar sus observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.”¹⁶

La Federación Interamericana de Medios por la Democracia presentó en su petición ante la Comisión, a las emisoras Radical Radio y Radio Su-Versión como presuntas víctimas; a pesar que la Comisión en su informe de fondo, no las presentó como tal, los representantes de las víctimas reiteraron ante esta Corte que debía tenerse como presuntas víctimas a las emisoras Radical Radio y Radio Su-Versión, en su memorial de solicitudes, argumentos y pruebas.

Corresponde al Estado de Chirilagua presentar sus observaciones respecto a la solicitud hecha por las presuntas víctimas, demostrando que esta Corte no debe tener en cuenta a las emisoras, como presuntas víctimas, en cuanto son personas jurídicas, a las cuales no les es aplicable la Convención Americana, es decir que siempre deberá ser una persona física la presunta víctima, por las siguientes razones, en primer lugar, la Convención estipula que “los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades que ella consagra *a toda persona* que esté bajo su jurisdicción”¹⁷ y que “para todos los efectos en la aplicación de la Convención *“persona es todo ser humano.”*”¹⁸ Agrega en el preámbulo, que los derechos esenciales del hombre “tienen como fundamento los atributos de la *persona humana*” y enfatiza la necesidad de otorgar condiciones que permitan a cada persona “realizar el ideal del ser humano libre, exento del temor y la miseria”.¹⁹

En segundo lugar, la Comisión ha considerado que el sistema de protección de los derechos humanos americano se limita a la protección de las personas naturales, excluyendo las personas

¹⁶ Reglamento del CORIDH. Adoptado el 24 de noviembre de 2000, y en vigencia a partir del 01 de junio de 2001. Artículo 38 Contestación de la demanda.

¹⁷ Convención Americana de Derecho Humanos. Artículo 1.1

¹⁸ Convención Americana de Derecho Humanos. Artículo 1.2

¹⁹ CIDH. Informe No. 39/99, Petición MEVOPAL, S.A., Argentina. 11 de marzo de 1999, en el Informe Anual de 1998, pág. 308 y ss., párr. 2 y 17.

jurídicas,²⁰ y por lo tanto no pueden ser víctimas de una violación de derechos humanos.²¹ Del mismo modo, “la Corte también ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la competencia de los órganos de la Convención respecto de los derechos de personas jurídicas”²², por ejemplo, en el caso Cantos vs. Argentina estableció que la persona jurídica actúa como un “vehículo” para el ejercicio de derechos de personas físicas²³, la Corte estableció que el señor José María Cantos desarrollaba sus derechos humanos a través de sus empresas, pero no por ello la persona jurídica puede ser víctima de vulneración de derechos humanos, en virtud, del artículo 1º numeral 2º que hace referencia a que toda persona es ser humano.²⁴ Consecuencialmente la Corte ha deducido que la persona jurídica no debe agotar recursos internos, lo importante es que la persona natural los haya agotado en su propio nombre, no importando si lo hizo por ella misma y en representación de la persona jurídica.²⁵ En este sentido el Estado manifiesta que “la persona humana – a título individual- es, por excelencia, el sujeto o titular primario de los derechos y las libertades fundamentales”²⁶

Es preciso denotar que la Comisión tuvo en cuenta a una persona jurídica como víctima frente a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre²⁷, y este precedente junto con la

²⁰ CIDH. Informe No. 10/91, Caso No. 10.169. Petición Banco Lima., Perú. 22 de febrero de 1991, en el Informe Anual de 1990-1991, pág. 454 y ss.; Informe No. 47/97, Tabacalera Boquerón S.A., Paraguay. 18 de octubre de 1997, en el Informe Anual de 1997, pág. 229 y ss., párr. 25 y 35.

²¹ CIDH. Informe No. 47/97, Tabacalera Boquerón S.A., Paraguay. 18 de octubre de 1997, en el Informe Anual de 1997, pp. 229 y ss., párrafos 25 y 35.

²² FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica. 2004. Pág. 255.

²³ CORIDH. Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia del 7 de septiembre de 2001, párrafos 29; ECHR. Case Pine Valley Developments Ltd and Others Vs. Ireland, Judgment of 29 November 1991. Serie A No. 222.

²⁴ CORIDH, Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia del 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85. párr. 22 y 23; CIDH. Informe No. 10/91, Caso No. 10.169. Petición Banco Lima., Perú. 22 de febrero de 1991, en el Informe Anual de 1990-1991, pág. 456 y ss., considerandos 1 y 2.; Informe No. 39/99, Petición MEVOPAL, S.A., Argentina. 11 de marzo de 1999, en el Informe Anual de 1998, pág. 308 y ss., párr. 17.

²⁵ CORIDH, Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia del 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85. párr. 48.

²⁶ ALBALADEJO, Isabel, y ESCOBAR, Santiago. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica. 2005. Pág. 39

²⁷ CIDH. Resolución N° 6/84 Caso No. 9250 ABC Color., Paraguay. 17 de mayo de 1984.

regla de interpretación de la Convención, por la cual “no se debe excluir o limitar el efecto que pueden producir la Declaración”²⁸, podría conllevar a que esta Corte tenga en cuenta a la persona jurídica como presunta víctima. Sin embargo, el Estado manifiesta que sin perjuicio del valor jurídico que tiene la Declaración Americana, esta Corte no es competente para declarar una violación de un derecho establecido en ésta, además el Estado confía plenamente en que la Corte propenderá como lo ha venido haciendo hasta ahora por garantizar el principio de seguridad jurídica en su actuación. Así mismo, el Estado de Chirilagua manifiesta que sigue en todo su actuar el criterio citado por la Corte²⁹ por el cual “es evidente que la Declaración no crea una obligación jurídica contractual, pero también lo es el hecho de que ella señala una orientación bien definida en el sentido de la protección internacional de los derechos fundamentales de la *persona humana*”³⁰, de igual forma, este Estado manifiesta como miembro de la Organización de Estados Americanos que “reconoce en la Declaración Americana el instrumento de mayor influencia y orientación del Sistema”³¹ Interamericano de Derechos Humanos.

En virtud de las razones expuestas, el Estado de Chirilagua solicita a la Honorable Corte no tenga en cuenta a las emisoras Radical Radio y Radio Su-Versión como presuntas víctimas y consecuentemente a ello, el Estado de Chirilagua manifiesta que “la regla de agotamiento de los recursos internos como un medio de defensa establecido a favor del Estado”³², “es renunciable y será el Estado denunciado quien podrá invocarlo como excepción de admisibilidad en la etapa

²⁸ Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 29-d.

²⁹ CORIDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89. 14 de julio de 1989. párr. 34.

³⁰ Consejo Interamericano de Jurisconsultos (CIJ). Recomendaciones e informes, 1949-1953 (1955), pág. 107. Citado en CORIDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89. 14 de julio de 1989. Párr. 34.

³¹ MELENDEZ MOREIRA, Miguel. El futuro del sistema interamericano de derechos humanos. Colegio interamericano de Defensa. Washington, D.C. 1997. Pág. 14.

³² ECHR. Case De Wilde, Ooms and Versyp. Vs. Belgium. Judgment 18 de junio de 1971. Serie A, No. 12

que corresponda ejercerla.”³³ Luego, este Estado desiste de la excepción de no agotamiento de recursos internos, en cumplimiento del principio *pacta sunt servanda*³⁴ no sólo como “un principio general de derecho internacional y de derecho moderno, sino el primero y principal.”³⁵; desiste considerando que la acción de nulidad fue interpuesta en representación de la emisora Radical Radio, y por lo tanto, es un recurso interno de la persona jurídica, que no se debe ser agotado para acceder ante el sistema interamericano.

El Estado de Chirilagua renuncia expresamente a su derecho de invocar esta excepción con el propósito de que ésta Corte conozca el presente caso y establezca que Chirilagua no ha vulnerado alguno de los derechos reconocidos en la Convención, en perjuicio de Melanie Pereira Peroni, Francis Hoffman y William Garra.

El Estado de Chirilagua comparte el criterio dado por la Corte por el cual “los efectos de la regla de agotamiento de recursos internos obligan a los Estados partes a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)”³⁶, de esta forma el desistimiento de la excepción podría estar imputando al Estado de Chirilagua una nueva violación a las obligaciones contraídas por la Convención

³³ MEDINA, Cecilia y NASH, Claudio. Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus Mecanismos de Protección. Centro de Derechos Humanos. Universidad de Chile. 2007. Pág. 63.

³⁴ Convención de Viena Sobre Derechos de los Tratados. Artículo 26

³⁵ VALDIVIA CANO, Juan Carlos. Algunos conceptos básicos del derecho internacional. Universidad Nacional de San Agustín. Pág. 157.

³⁶ CORIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 91; y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 90.

Por lo anterior, sin perjuicio del desistimiento antes realizado, el Estado manifiesta que su ordenamiento jurídico tiene a disposición de toda su población una serie de recursos judiciales adecuados y efectivos que protegen sus derechos; recursos a los que las presuntas víctimas siempre tuvieron acceso e inclusive hicieron uso de ellos. Sin embargo, por ser éste “un aspecto que se aproxima sensiblemente a la materia de fondo”³⁷, el Estado solicita a esta Honorable Corte que la cuestión de admisibilidad relativa al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna se trate en conjunto con el fondo del caso.

5.2. Análisis de los asuntos legales del caso

5.2.1. Chirilagua no violó el artículo 25 en relación con el 1.1 de la Convención

La Corte ha determinado que “el derecho de protección judicial, es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo”³⁸, como procedimiento sencillo y breve³⁹ que tiene por “objeto la tutela de los derechos fundamentales.”⁴⁰ Así mismo, ha establecido, “la

³⁷ CORIDH. . Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1. párr. 91; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 90; y Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, párr. 93; Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. párr. 34

³⁸ CORIDH, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87. 06 de octubre de 1987, Serie A No 9. párr. 23; Caso Acevedo Buendía y otros “Cesantes y Jubilados de la Contraloría” Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198. párr. 69; Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144. párr. 217; Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197. párr. 61; Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104. párr. 73; TEDH. Case of Popov Vs. Moldova. Judgment of 18 January 2005. Serie A no. 14. párr. 40.

³⁹ CORIDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02. 28 de agosto de 2002. párr. 122; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87. 06 de octubre de 1987. párr. 23; Habeas Corpus Bajo suspensión de garantías. Opinión Consultiva OC-87/87. 30 de enero de 1987. párr. 32; Caso Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. párr. 107.

⁴⁰ CORIDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. párr. 23; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40. párr. 163; Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68. párr. 101; Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56. párr. 121; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala.

obligación a cargo de los Estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales”⁴¹. “La noción de “efectividad” está vinculada, entre otros factores, a la adecuación del remedio en tanto instrumento de tutela del derecho afectado —es decir, como herramienta para prevenir, detener, privar de efectos y reparar la afectación al derecho humano de que se trate”⁴²

“Esta garantía no sólo se aplica respecto de los derechos consagrados en la Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley”⁴³, se aplica también a aquellos “que no son susceptibles de suspensión en estado de emergencia.”⁴⁴

Según la Corte, “el derecho de protección judicial incorpora el principio de efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos”⁴⁵. Según este principio, para que “el recurso efectivo exista, no basta con que esté previsto en la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para

Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. párr. 191; Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 2.1

⁴¹ CORIDH. Caso Castillo Petrucci y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. párr. 184; Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1. párr. 91; Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196. párr. 110; Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 34; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79. párr. 111; y Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. párr. 23.

⁴² COURTIS, Cristian. El derecho a un recurso rápido sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos. Revista Interamericana de Derecho Procesal Constitucional. Vol. 5. IIDPC. México. 2006. Pág. 43.

⁴³ Convención Americana de Derechos Humanos Artículo 2.1; CORIDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69. párr. 163; Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68. párr. 101; Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56. párr. 121; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. párr. 191.

⁴⁴ CORIDH. El habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías. Opinión consultiva OC-8/87. 30 de enero de 1987. párr. 32; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87. 06 de octubre de 1987. párr. 23.

⁴⁵ CORIDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87. 06 de octubre de 1987. párr. 24. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1. párr. 90; Caso Fairén Garbí y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2. párr. 90; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3. párr. 92; Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales Y Culturales. Artículo 2.

establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”⁴⁶.

La Corte también ha expresado que “la disposición de protección judicial, constituye uno de los pilares básicos de la Convención y de un Estado de Derecho en una sociedad democrática”⁴⁷. Así mismo, manifiesta que “la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado, en el cual semejante situación tenga lugar”⁴⁸. De la interpretación exegética del artículo 25 de la Convención, el Estado esgrime los compromisos adquiridos frente al derecho de protección judicial, es así como, el Estado debe garantizar que las autoridades competentes decidan sobre los derechos de la persona que interponga el recurso efectivo; el Estado deberá desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y deberá garantizar el cumplimiento de la decisión tomada por la autoridad competente en el recurso.⁴⁹

El Estado demostrara, que ha cumplido a cabalidad las obligaciones que emanan del derecho de protección judicial, es decir, “proporciona un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo, que

⁴⁶ Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144. párr. 217; Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 73; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79. párr. 134.

⁴⁷ CORIDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27. párr. 102; Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103. párr. 117; Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99. párr. 121; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69.

⁴⁸ CORIDH. Caso Castillo Petrucci y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. párr. 185; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37. párr. 164; Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35. párr. 65; Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34. párr. 82; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. párr. 131; y Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 183, párr. 78;

⁴⁹ Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25-2; CORIDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 137; Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144. párr. 213, y Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109. párr. 192.

protege los derechos de las personas”⁵⁰; y garantiza que dicho recurso, “sea decidido, sean desarrolladas todas las posibilidades del mismo y asegura el cumplimiento a la decisión”⁵¹. El Estado manifiesta que proporciona la acción de constitucionalidad, como el recurso idóneo para la protección de sus derechos. De esta forma, Melanie Pereira hizo uso de este recurso, como mecanismo transitorio de la acción de nulidad; en este sentido, la jurisprudencia chiralaguense desarrolló la acción de constitucionalidad como mecanismo transitorio, dicho recurso garantiza una decisión rápida y efectiva, en la medida, en que busca, la no incursión en un retardo injustificado, cuando se encuentre en riesgo, los derechos humanos de la persona. Del mismo modo, Francis Hoffman hizo uso de la acción de constitucionalidad, presentándolo a favor de ACOSINTI y sus afiliados, el cual fue resuelto el 26 de mayo de 2008, por el tribunal de conocimiento.

El Estado garantiza que este recurso es sencillo y rápido, es decir, que el Estado cumple la obligación de “establecer procedimientos expeditos y evitar cualquier retraso en su resolución para prevenir que se generara una afectación del derecho concernido”⁵², como se establece en los hechos, las personas que acceden al recurso disponen de una estructura judicial suficiente que permite su fácil interposición. El Estado manifiesta en este sentido que la acción de constitucionalidad es garantista de derechos, al poder ser interpuesta ante cualquier juez o corte

⁵⁰ CORIDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97. párr. 52; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. párr. 134; y Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. párr. 90; ECHR. Keenan v. the United Kingdom, Judgment of 3 April 2001, párr. 122.

⁵¹ Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99. párr. 121; Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98. párr. 126; y Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90. párr. 58.

⁵² CORIDH. Caso Apitz Barbera y otros “Corte Primera de lo Contencioso Administrativo” Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 156 y 170; Caso Acevedo Buendía y otros “Cesantes y Jubilados de la Contraloría” Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198. párr. 74.

de la República, por cualquier persona. Además, dentro de los hechos se establece que las acciones de constitucionalidad ejercidas, se resolvieron en un término promedio de 18 días.

Visto lo anterior, el recurso que proporciona el Estado de Chirilagua es sencillo y ágil cumpliendo el fin de respetar y garantizar el derecho de protección judicial, y demostrando a su vez que ha adecuado su legislación con el mismo fin. Así mismo, el recurso que proporciona el Estado demuestra su utilidad en la práctica, es efectivo, en ningún momento se esgrime de los hechos, “que el poder judicial carezca de independencia para decidir con imparcialidad”⁵³, “la independencia judicial significa libertad de los jueces frente a la influencia política”⁵⁴ no se establece en los hechos que el poder judicial de Chirilagua, se encuentre influenciado políticamente.

Tampoco hay prueba alguna que permita establecer, que el Estado de Chirilagua no “proporciona los medios para ejecutar sus decisiones”⁵⁵, por el contrario, el Estado proporciona la figura jurídica de petición de desacato por incumplimiento de orden judicial para garantizar que lo decidido por las autoridades competentes se cumpla. Sin embargo, el Estado considera importante expresar, que “el derecho a contar con recursos efectivos no significa que tales recursos deban, en toda circunstancia, producir un resultado favorable a quien los interpuso”⁵⁶.

En este sentido, el Estado está de acuerdo con la observación de la Comisión por la cual “la obligación del Estado de administrar justicia es de medio y no de resultado, por lo que no se

⁵³ CORIDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37. párr. 155; Caso Castillo Petrucci y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. párr. 129; y Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87. 06 de octubre de 1987, Serie A No 9. Párr. 23 y 24.

⁵⁴ BURGOS, Germán. Independencia judicial en América Latina. ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?. Edición ILSA. Colombia 2003. Pág. 265

⁵⁵ Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99. párr. 121; Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98. párr. 126; y Caso Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90. párr. 58.

⁵⁶ FAÚNDEZ, Héctor. El agotamiento de los recursos internos en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Caracas, Venezuela. 2008. Pág. 78.

incumple porque no produzca un resultado satisfactorio para las pretensiones de la peticionaria; el mero descontento con el resultado obtenido de la administración de justicia no es suficiente para tacharlo de arbitrario.⁵⁷ Por último, el Estado manifiesta que en ningún momento, se configura “un cuadro de denegación de justicia”⁵⁸, es así como las acciones de constitucionalidad interpuestas por las presuntas víctimas se resolvieron en un promedio de 18 días, lo que demuestra que no “se incurrió en un retardo injustificado”⁵⁹.

El Estado también “garantiza que se desarrollen las posibilidades del recurso judicial”⁶⁰, actuando conforme a lo pronunciado por la Corte cuando dispuso que el Estado debe garantizar “que ante la denegatoria de información bajo el control estatal, exista un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita que se determine si se produjo una vulneración del derecho del solicitante de información y, en su caso, se ordene al órgano correspondiente la entrega de la información. En este ámbito, dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta que la celeridad en la entrega de la información es indispensable en esta materia. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2 y 25.2.b) de la Convención si el Estado Parte en la Convención no tiene un recurso judicial para proteger efectivamente el derecho tiene que crearlo”⁶¹.

⁵⁷ CIDH. Informe N° 122/01. Petición 0015/00. Wilma Rosa Posadas, Argentina. 10 de octubre de 2001. párr. 9.

⁵⁸ CORIDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 48; Caso García Prieto y Otros Vs El Salvador. Fondo. Sentencia de 24 de Noviembre de 2008. párr. 43; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148. párr. 396; Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. párr. 226.

⁵⁹ CORIDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. párr. 93; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. párr. 136 y 13; y Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79. párr. 134; 31.; CIDH. Informe N° 35/98. Caso 11.760. Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo de Mur, Perú. 5 de mayo de 1998. párr. 13, 14 y 30.

⁶⁰ CORIDH. El habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías. Opinión consultiva OC-8/87. 30 de enero de 1987. párr. 32; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87. 06 de octubre de 1987. párr. 27-30; Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33. párr. 53-55.

⁶¹ CORIDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. párr. 137.

Según lo anterior, se demuestra el cumplimiento en el desarrollo de las posibilidades del recurso judicial, primero cuando existe y segundo cuando permite determinar si hubo una violación a un derecho; es así que ACOSINTI como vehículo para el ejercicio de los derechos de las comunidades de Cambacrópolis y San Pedro de los Aguados, interpuso una acción de constitucionalidad, aduciendo la violación a su derecho de información, el cual fue decidido a favor del accionante, por la Corte Primera de Circuito de Gorgia.

El Estado manifiesta que este mismo recurso siempre estuvo disponible para Melanie Pereira, en defensa de su derecho de información, el Estado manifiesta que la omisión en la contestación a la solicitud presentada por Melanie Pereira, no configura una violación al derecho de libertad de expresión, como se demostrara en los alegatos correspondientes.

Por las razones anteriores, el Estado de Chirilagua solicita a esta Honorable Corte no declare la responsabilidad internacional por la violación del artículo 25 de la Convención en relación con el 1.1 de la misma.

5.2.2. Chirilagua no violó el artículo 8 en relación con el 1.1 de la Convención

El derecho de garantías judiciales consagrado en la Convención “se aplica al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, cualesquiera que ellas sean, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”⁶². La Corte ha determinado que, “el debido proceso incide sobre

⁶² CORIDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87. 06 de octubre de 1987. párr. 27; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. párr. 102; Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. párr. 69; Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. párr. 124; Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. párr. 147; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. párr. 116.

la determinación de derechos y obligaciones civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter, y no sólo debe aplicarse en el proceso penal.”⁶³

Así mismo, la Corte ha pronunciado que “es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”⁶⁴. “La aplicación de las garantías del artículo 8° de la Convención no sólo son exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el poder judicial sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional”⁶⁵ El artículo 8 “que consagra un número importante de garantías de debido proceso implícitas en el concepto de proceso regular”⁶⁶ menciona las condiciones que se deben aplicar a los procesos judiciales para que se dé la adecuada defensa de las personas de cuyos derechos se discute, entre ellos, el de un juez competente⁶⁷, se “identifica el concepto de tribunal competente con el de “juez natural”⁶⁸, es

⁶³ CORIDH. *Yatama Vs. Nicaragua*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. párr. 148-164; *Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. párr. 125-134; *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. párr. 117; y *Garantías Judiciales en Estados de Emergencia* (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87. 06 de octubre de 1987. párr. 28.

⁶⁴ *Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. párr. 126; *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. párr. 118. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11. párr. 28.

⁶⁵ HURTA GUERRERO, Luis Alberto. *El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos* (análisis del artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Comisión Andina de Juristas. Perú. 2001. Pág. 3

⁶⁶ O'DONELL, Daniel. *Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, Jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano*. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Colombia. 2004. Pág. 64.

⁶⁷ CORIDH. *Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207. párr. 4 y 110; *Caso Palamara Iribarne Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. párr. 125.

⁶⁸ O'DONELL, Daniel. *Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, Jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano*. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Colombia. 2004. Pág. 139.

decir, implica la intervención de un órgano competente, independiente e imparcial. De igual manera el proceso se debe llevar a cabo dentro de un plazo razonable. Así mismo, el Estado debe proporcionar las garantías necesarias para el desarrollo del proceso, por ejemplo, el inculpado tiene derecho a “ser asistido por un traductor o interprete⁶⁹, si no habla el idioma del órgano judicial; derecho a que “se le comunique previa y detalladamente al inculpado de la acusación formulada”⁷⁰; derecho a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor; derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable; y derecho a la “segunda instancia”⁷¹. Además incluye dentro de las garantías judiciales que el proceso penal debe ser público.

Corresponde al Estado demostrar que ha proporcionado las garantías judiciales suficientes, primero, dentro de los procedimientos administrativos sancionatorios, respecto a los actos administrativos de la COFERETEL, uno por el cual se ordenó el cierre de las emisoras ilegales y la confiscación de sus equipos; y otro que ordenó la cancelación de la concesión de Radical Radio; segundo, en los procesos penales en contra de Melanie Pereira, Francis Hoffman y William Garra; y por último se demostrara que suple las garantías judiciales en el proceso de acción de nulidad interpuesta en representación de Radical Radio, como vehículo en el ejercicio de derecho de Melanie Pereira.

⁶⁹ Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 8.a; CORIDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. párr.68; Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68. párr. 129; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87. 06 de octubre de 1987. párr. 28.

⁷⁰ Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 8.b; CORIDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71 párr. 71; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. párr. 105; Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35. párr. 51.

⁷¹ Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 8.d; CORIDH. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. párr. 32; Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35. párr. 51.

En cuanto, al acto administrativo de la COFERETEL, por el cual se ordena el cierre de las emisoras ilegales y la confiscación de los equipos, fue previo a la incautación de los equipos de Radio Su-Versión y además la entidad informó anteriormente de la revisión que hacia al espectro radioeléctrico. Del acto administrativo que ordenó la cancelación de la concesión de Radical Radio, se dió con fundamento en la ley, toda vez que, Melanie Pereira cedió el uso de la concesión a Radio Su-Versión cometiendo una ilegalidad⁷², se informó el 5 de marzo de 2008 de la revisión y el 6 de abril del mismo año, se dió orden del cierre. También ejercieron su derecho de defensa y se dió garantía de sus derechos fundamentales, al ser interpuestas las acciones de constitucionalidad.

Las actuaciones ilegales que se suprimieron por medio de los dos actos administrativos de la COFERETEL, junto con las actuación en hechos como el Facebookazo desembocaron en responsabilidades penales por los delitos de hurto de bienes del Estado, difamación, instigación para delinquir y homicidio, procesos penales que cumplieron las garantías judiciales, suficientes para la determinación de los derechos de las presuntas víctimas. El Estado expresa en este sentido que “los deberes que al Estado imponen, en materia de derechos humanos, la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, abarcan la obligación estatal de prevenir las conductas punibles y sancionar a los responsables de las mismas”.⁷³

Así mismo, el Estado manifiesta que los procesos penales han proporcionado las garantías judiciales, los inculpados fueron juzgados por órganos judiciales competentes, imparciales e independientes; dentro de un plazo razonable. Del mismo modo, el Estado ha suministrado las garantías suficientes a los inculpados, se estableció legalmente la culpabilidad de cada uno de ellos; dentro de los hechos no se esgrime que los inculpados no hablen el idioma de los órganos

⁷² Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Chirilagua o Ley 56 de 1976. Artículo 92

⁷³ FRÜHLING, Michael. Los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el secuestro y los acuerdos especiales. Alto comisionado para los Derechos Humanos. Colombia. 2003. Pág. 2

judiciales, por lo cual no es necesario que se le proporcione traductor; dentro de los procesos existió un etapa de imputación y de acusación, informándosele previamente de la acusación; los inculcados contaron con la defensa adecuada; en ningún momento ninguno de los inculcados fue obligado a declararse culpable o a declarar contra sí mismo; y todos ellos hicieron uso del recurso de apelación sin ninguna dificultad, garantizándoles su derecho a recurrir el fallo ante un juez superior⁷⁴, este derecho “implica que toda persona tiene derecho a disponer, en un plazo razonable y por escrito, de los fallos dictados en la determinación de su responsabilidad, debidamente motivados, a efectos de su posible apelación”⁷⁵.

Por las razones expuestas anteriormente, el Estado de Chirilagua solicita a esta Honorable Corte, no declare la responsabilidad internacional por la violación al artículo 8 en relación con el 1.1 de la Convención.

5.2.3. Chirilagua no violó el artículo 13 en relación con el 1.1 de la Convención

La libertad de expresión “es un derecho con dos dimensiones, una dimensión individual, por la cual cada persona tiene el derecho a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada”⁷⁶. Las dos dimensiones de la libertad de expresión “son interdependientes, y deben

⁷⁴ Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 8-h.; CORIDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. párr. 161; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119. párr. 135 y 170; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. párr. 158 y 161; y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206. párr. 90.

⁷⁵ HURTA GUERRERO, Luis Alberto. El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Comisión Andina de Juristas. Perú. 2001. Pág. 21

⁷⁶ CORIDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. Párr. 53. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. párr. 75; Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141. párr. 163. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. párr. 108; Caso Ricardo Canese Vs.

garantizarse paralelamente, para dar efectividad al derecho consagrado en la Convención”⁷⁷. En este sentido, “el derecho a la libertad de expresión es considerado como uno de los pilares de la democracia, ya que para la formación de una opinión pública dinámica y plural, es indispensable contar con una sociedad suficientemente informada.”⁷⁸

Los Estados parte deben garantizar, primero, los medios de comunicación estén abiertos a todos sin discriminación, “no deben existir individuos o grupos que *a priori*, que estén excluidos del acceso a los medios”⁷⁹; segundo, “asegurar la pluralidad en los medios de comunicación, no debe existir monopolio de los medios”⁸⁰; tercero, “el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores en cuanto, “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede ser objeto de restricciones.”⁸¹ Y cuarto, dichas restricciones no podrán ser medidas indirectas⁸².

Además de las obligaciones ya descritas, el artículo 13 de la Convención Americana, “ampara el derecho de las personas a acceder a la información en poder del Estado, establece una obligación positiva para el Estado de suministrar dicha información, en forma tal que la persona pueda

Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. párr. 77. Caso “La Última Tentación de Cristo”(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. párr. 64.

⁷⁷ CORIDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. párr. 80. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. párr. 149. Caso “La Última Tentación de Cristo”(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. párr. 64.

⁷⁸ ONU. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Derecho a la libertad de expresión y Libertad de Acceso a la información. Boletín 15. Pág. 1

⁷⁹ CORIDH. Caso “La Última Tentación de Cristo”(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. párr. 64. párr. 61e; La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. párr. 34; CIDH. Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios. párr. 23.

⁸⁰ CORIDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. párr. 34; CIDH. Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios. párr. 23.

⁸¹ ONU. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Derecho a la libertad de expresión y Libertad de Acceso a la información. Boletín 15. Pág. 1

⁸² CORIDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. párr. 34; CIDH. Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios. párr. 23.

obtener y conocer esa información, o ser informada mediante una respuesta fundamentada de las razones legítimas que impiden tal acceso de conformidad con la Convención”⁸³. Así mismo, “los Estados deben consagrar el derecho a la revisión judicial de la decisión administrativa a través de un recurso sencillo, efectivo, expedito y no oneroso, que permita controvertir las decisiones de los funcionarios públicos que niegan el derecho de acceso a una determinada información o que simplemente omiten dar respuesta a la solicitud”⁸⁴.

El Estado demostrara que cumple con cada una de las obligaciones anteriores, en primer lugar, el Estado manifiesta que los medios de comunicación estuvieron disponibles para Melanie Pereira, y William Garra, en ningún momento les fue negada la posibilidad de expresarse por medios de comunicaciones, inclusive hacían uso del espectro electromagnético. Sin embargo, las presuntas víctimas cometieron el error, primero de ceder el espectro electromagnético sin autorización del Estado, incurriendo en una ilegalidad y segundo, promovieron el odio nacional entre opositores y simpatizantes del gobierno, por lo cual el Estado lamentablemente tuvo que restringir su derecho de libertad de expresión. En este sentido la Convención establece que “toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad”⁸⁵ ellos debieron ejercer el derecho de libertad de expresión de una forma más responsable, que no afectara derechos de terceros.

De la misma manera Francis Hoffman tuvo acceso a los medios de comunicación, inclusive el Estado, en una muestra de *buena fe*⁸⁶ principio que “en materia de derechos humanos, implica

⁸³ CORIDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. párr. 77. CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Claude Reyes y otros v. Chile. Transcritos en la sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151. párr. 58 a) y b); CIDH. Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión. Informe 2009. párr. 18.

⁸⁴ CORIDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. párr. 137.

⁸⁵ Convención americana de Derechos Humanos. Artículo. 32.1

⁸⁶ Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Artículo 26; Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. párr. 99; I.C.J. Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom). Preliminary Objections. Judgment of 2 December 1963, Reports 1963, págs. 18 y 27; y, Permanent Court of International Justice, Case of the Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Judgment of 7 June 1932, Series A/B No. 46, págs. 161 y 162.

actuar con la completa diligencia para promover y proteger debidamente los derechos y libertades fundamentales de mujeres y hombres.”⁸⁷, supuso que Radio Su-Versión tenía autorización legal para acceder al espectro radioeléctrico, permitiendo el acceso a la emisora a uno de los edificios estatales y a algunos equipos de la ciudad en el año 2001. Por las particularidades técnicas que se requieren la revisión del espectro radioeléctrico el Estado percibió la ilegalidad en el uso del espectro, en el año 2008, al incurrir en la misma, el Estado debió restringir el derecho de libertad de expresión.

El Estado de Chirilagua conociendo que debe “intervenir activamente de modo que genere condiciones estructurales que favorezcan el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación”⁸⁸ desarrolló una política para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro electromagnético y el pluralismo informativo, actualmente se desarrolla un proceso de selección para dar las concesiones del espectro electromagnético, se espera conceder 100 licencias para radio comerciales y 100 licencias para radios comunitarias. El Estado considera relevante aclarar que Alianza Fresa no constituye un monopolio dentro de los medios de comunicación, dentro de las 450 licencias de radiodifusión concedidas por el Estado, Alianza Fresa solo representa el 10%. En este sentido, el Estado manifiesta que “la existencia de monopolios u oligopolios de medios de comunicación impide la circulación y el debate de distintas opiniones y noticias, y así restringe en la práctica las vías de expresión y difusión del pensamiento y la información.”⁸⁹, por ello no permite, ni permitirá la existencia de dichos monopolios dentro de su jurisdicción.

⁸⁷ ALBALADEJO, Isabel, y ESCOBAR, Santiago. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica. 2005. Pág. 58

⁸⁸ Asociación por los derechos civiles. La libertad de Expresión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pág. 17

⁸⁹ Asociación por los derechos civiles. La libertad de Expresión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pág. 16

El Estado de Chirilagua no tiene censura previa, “la peor negación de las libertades es la censura previa que se da toda vez que el derecho de información termina en nada ante la prerrogativa del gobernante de eliminar informaciones, críticas o denuncias en forma tajante antes de su difusión.”⁹⁰. Sin embargo, “sujeta el ejercicio abusivo del derecho de libertad de expresión por medio de responsabilidades ulteriores”⁹¹, cumpliendo los requisitos establecidos por la Convención⁹². El Estado se refiere a responsabilidades ulteriores a las sanciones penales de las presuntas víctimas, por los delitos de difamación e instigación a delinquir, el Estado manifiesta que si bien esta Corte al no constituirse como una “cuarta instancia”⁹³ “no tiene competencia para examinar lo decidido por los tribunales nacionales”⁹⁴, pues “la jurisdicción interna tiene prioridad frente a la internacional”⁹⁵. “La jurisdicción interna tendrá siempre la preferencia; la internacional o universal entrara en escena cuando un Estado no quiera o no pueda poner en acción sus sistemas jurídico-penales para sancionar los crímenes de carácter internacional”⁹⁶.

⁹⁰ INTERNATIONAL CENTER FOR JOURNALIST. Medios y Libertad de Expresión en las Américas. Washington, DC. 2003. Pág. 15

⁹¹ Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 13.2; La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. párr. 34; CIDH. Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios. párr. 23. párr. 30; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. párr. 64; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. párr. 146; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. párr. 108, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. párr. 77; Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 02 de mayo de 2008. Serie C No. 177. párr. 54.

⁹² Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 13.2. a y b.; CORIDH. La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 convención americana sobre derechos humanos). Opinión Consultiva OC-5/86. párr. 39.

⁹³ CIDH. Informe 87/98. Caso 11.216. Oscar Vila-Mazot, Venezuela. 12 de octubre de 1998. párr. 17.

⁹⁴ FAÚNDEZ, Héctor. El agotamiento de los recursos internos en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Caracas, Venezuela. 2008. Pág. 78. Pág. 31

⁹⁵ CORIDH. Caso Fairén Garbí y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2. párrs. 91 y 92; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3. párr. 94 y 95; Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90. párr. 33; Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7, voto razonado del Juez Piza Escalante, párr. 25; Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89. 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, voto concurrente razonado del Juez Piza Escalante. párr. 37; CIDH. Informe 85/98. Caso 11.472. Gilbert Bernard Little, Costa Rica. 28 de septiembre de 1998. párr. 49.

⁹⁶ BORJÓN NIETO, José J. Jurisdicción universal y jurisdicción interna: ¿Cómo salvar escollos? Pág. 5.

El Estado comparte el criterio de la Corte por el cual “no estima contraria a la Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales. En todo momento la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación”⁹⁷.

El Estado de Chirilagua demostrará que cabía la posibilidad de sancionar penalmente a las presuntas víctimas por los delitos de difamación e instigación para delinquir por la gravedad extrema de sus actuaciones. En este sentido es importante determinar que en casos conocidos por la Corte, donde se restringe el derecho de libertad de expresión por una sanción penal, las víctimas han sido imputadas penalmente por expresar “hechos de interés público”⁹⁸, por ejemplo, casos de corrupción o realización de actividades ilícitas por parte de un funcionario público, “en cuanto pretendan castigar a los periodistas y también a las personas que acuden a la prensa para informar, criticar o denunciar a funcionarios por actuaciones controvertidas en el manejo de la cosa pública”⁹⁹. Caso contrario el presente que en ningún momento las presuntas víctimas presentan un hecho de interés público, nunca se denuncia un caso de corrupción o una actividad

⁹⁷ CORIDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 02 de mayo de 2008. Serie C No. 177., párr. 78; Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009., párr. 120

⁹⁸ CORIDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 02 de mayo de 2008. Serie C No. 177., párr. 92; Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207., párr. 37; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 06 de febrero de 2001. Serie C No. 74., párr. 157; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135., párr. 69; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111., párr. 92; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de julio de 2004. Serie C No. 107., párr. 105.

⁹⁹ INTERNATIONAL CENTER FOR JOURNALIST. Medios y Libertad de Expresión en las Américas. Washington, DC. 2003. Pág. 15

ilícita o un mal manejo de la cosa pública, por parte de Atilio Escalante, por ello el Estado de Chirilagua solicita a esta Honorable Corte tenga en cuenta y analice la excepcionalidad del uso de medidas penales que ha hecho el Estado.

Para demostrar la extrema gravedad que configuró la conducta desplegada por las presuntas víctimas. El Estado manifiesta que cumple cabalmente con las obligación convencional por la cual “deberá estar prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda *apología del odio nacional*, racial o religioso que constituyan *incitaciones a la violencia* o cualquier otra acción ilegal similar contra *cualquier persona o grupo de personas*, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”¹⁰⁰.

Por lo anterior, el Estado de Chirilagua establece en su legislación penal el delito de difamación, el cual se aplicó en los procesos penales del siguiente modo, Melanie Pereira, Francis Hoffman y William Garra imputaron por medios de comunicación radial a Atilio Escalante unos hechos determinados capaz de exponerlo al *odio público*; en los casos penales por difamación no se discutió el honor o reputación de Atilio Escalante porque el Estado conoce de antemano que “los funcionarios públicos, están más expuestos a la crítica pública”¹⁰¹ y de igual forma el Estado reconoce “el principio de que los funcionarios públicos deben tolerar un grado mayor de crítica que el común de los ciudadanos”¹⁰²; sin embargo con sus expresiones tales como “defender sus derechos *a toda costa* contra la avanzada autoritaria de la oligarquía terrateniente” y la

¹⁰⁰ Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 13-5.

¹⁰¹ Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH. Principio 11; CORIDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. párr. 86-88; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. párr. 83; Caso “La Última Tentación de Cristo”(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. párr. 69; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. párr. 152 y 155; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. párr. 83. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. párr. 125 a 129; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. párr. 87.

¹⁰² CORAO AYALA, Carlos. La sentencia 1.942 vs La protección internacional de los Derechos Humanos. Revista Interamericana de Derecho Procesal Constitucional. Vol. 1. IIDPC. México. 2004. Pág. 175.

promoción de los grupos en Facebook que incentivaban el odio hacia Atilio Escalante, incitaron a la violencia, violencia que ocasionó la muerte a 18 personas y 20 heridos, entre la realización del Facebookazo y las elecciones generales de los diputados federales de 2008, dichas muertes y heridos se dieron en enfrentamientos entre opositores y simpatizantes del gobierno, muestra clara del odio propagado entre los unos y los otros.

El Estado manifiesta al igual que la Corte, que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, la Convención prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, las cuales no deben de modo alguno restringir, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa”¹⁰³. Para ello la responsabilidad ulterior debe cumplir los siguientes requisitos¹⁰⁴: “1. La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas; 2. La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley; 3. La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas; y 4. Que estas causales de responsabilidad sean necesarias para asegurar los mencionados fines.” El Estado de Chirilagua cumple con los requisitos anteriores, primero los delitos de difamación e instigación a delinquir se encuentran establecidos en el Código Penal, previamente a los hechos, en el mismo código se encuentran definidos y taxativos. Se establecieron con el fin legítimo de asegurar la protección del orden público, y sus causales de responsabilidad son necesarias para asegurar no solamente el orden público como ya se mencionó, sino para proteger los derechos de la vida e integridad personal de la población de

¹⁰³ Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 13-3; CORIDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. párr. 120; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. párr. 79; Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. párr. 54. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193. párr. 110.

¹⁰⁴ Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 13.2. a y b; CORIDH. La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/86. párr. 39.

Chirilagua. En este sentido la convención establece, “los derechos de las personas están limitados por los derechos de los demás”¹⁰⁵.

El Estado no restringe el derecho de libertad de expresión por vías o medios indirectos. Los actos administrativos por los cuales se ordena el cierre de las emisoras ilegales y la cancelación de la concesión a Radical Radió, en ningún momento son una medida encaminada a impedir la comunicación y expresión de ideas y opiniones, son medidas sancionatorias para Radical Radio y Radio-Su Versión por su actuación ilegal. La primera incumplió la norma por la cual no podía ceder el espectro electromagnético concedido, sin autorización previa del Estado¹⁰⁶ y la segunda transmitió usando el espectro electromagnético sin cumplir los requisitos que se lo permitieran.

Por otra parte, el Estado determinara el cumplimiento de sus obligaciones respecto a “el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano fundamental, contenido dentro del derecho a la libertad de expresión.”¹⁰⁷. Así pues, el Estado tiene la obligación de “responder sustancialmente a las solicitudes de información en un plazo razonable, determinando si existe o no el derecho de acceso y, en caso de existir, proveer la información requerida”¹⁰⁸. Por ello, el Estado ha dispuesto de la acción de constitucionalidad, que aplica cuando el funcionario omite dar la información a la solicitud. “Para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información a través de una solicitud los Estados deben implementar un procedimiento simple, rápido y no oneroso, cuyo rechazo pueda ser revisado”¹⁰⁹ y como se estableció en los alegatos de protección judicial dicho recurso es sencillo, ágil y efectivo. De este modo se garantiza el acceso

¹⁰⁵ Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo. 32.2

¹⁰⁶ Ley Orgánica de Telecomunicaciones o Ley 56 de 1976. Artículo 92.

¹⁰⁷ RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Estudio Especial Sobre el Derecho de Acceso a la Información. CIDH. Washington, D.C. 2007. Pág. 51.

¹⁰⁸ CORIDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. párr. 77. CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Claude Reyes y otros v. Chile. Transcritos en la sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151. Párr. 58 a) y b); CIDH. Relatoría especial para la libertad de expresión. Informe 2009., párr. 18.

¹⁰⁹ RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Estudio Especial Sobre el Derecho de Acceso a la Información. CIDH. Washington, D.C. 2007. Pág. 41.

a la información, “este derecho se vincula con el derecho que tiene toda persona de acceder a documentos de cualquier naturaleza”,¹¹⁰ pero dicha efectividad está supedita a un plazo razonable, luego dependerá de las actuaciones del interesado, en este aspecto, Melanie Pereira en ningún momento manifestó o interpuso la acción de constitucionalidad por su derecho de información, nunca hizo uso del recurso para proteger su derecho de información conociendo y habiendo accedido al recurso por otros derechos, sin embargo el Estado garantizó un recurso para que ejerciera su derecho.

Por las razones anteriores, el Estado de Chirilagua solicita a esta Honorable Corte no declare la violación por el artículo 13 en relación con el 1.1 de la Convención.

6. Petitorio

Por las consideraciones expuestas precedentemente, el Estado de Chirilagua solicita respetuosamente a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que admita las dos excepciones preliminares interpuestas y declare que la República Federativa de Chirilagua no es responsable internacionalmente por la presunta violación a los artículos 8, (Garantías Judiciales) 13 (Libertad de pensamiento y expresión) y 25 (Protección Judicial) todos ellos en relación con el 1.1 (Obligación de respeto) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de las presuntas víctimas del presente caso, y consecuentemente no podrá establecerse reparación alguna.

¹¹⁰ COLMENARES OLIVAR, Ricardo. La libertad de información y las investigaciones penales en Venezuela. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Venezuela. 2000. Pág. 43.